



**MANUAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN LAS
ACCIONES JUDICIALES DE “CONTRATO REALIDAD”**

2019

Aprobado en sesión del Comité de Conciliación de fecha: 24 de Julio de 2019

Preparado por LINA JOHANNA CASTAÑEDA GIRALDO, Directora de Defensa Jurídica.



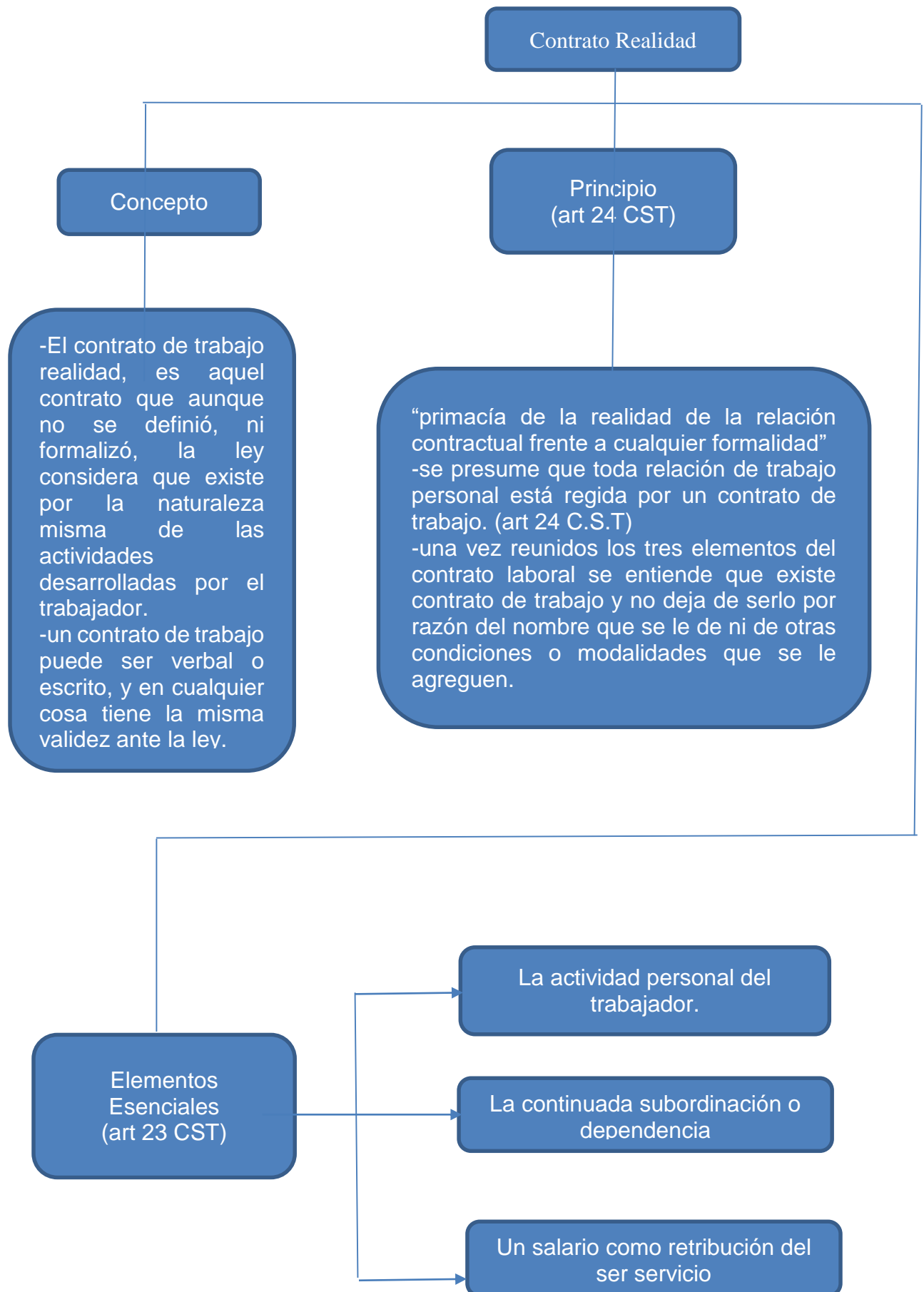
MANUAL DE DEFENSA “CONTRATO REALIDAD”

Tiene su origen en el Artículo 3 del Decreto 4085 de 2011, “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, define la defensa GESTIÓN JURÍDICA MANUAL DE DEFENSA JUDICIAL Código: ANSV-JUR-GU-01 Versión:00 Fecha: 2017-01-19 Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9. PBX 739 9080 | www.ansv.gov.co 10 judicial como “el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio público.” “La defensa judicial es un componente de naturaleza reactiva, que obra ex post, esto es, su desarrollo se produce a partir del supuesto daño en que se basa la reclamación que exige defensa; desde lo institucional es una cuestión de orden propiamente jurídico y por tanto de responsabilidad de las instancias de gestión jurídica en la entidad.”

Debiendo entonces los abogados que presten sus servicios de representación del ente territorial en aras de propender por una defensa integra y la protección de los intereses litigiosos en los que la entidad haga parte, observar con estricto cumplimiento los principios constitucionales y legales establecidos, tales como el Debido proceso, Legalidad, Acceso a la Jurisdicción, Doble Instancia, Publicidad, Contradicción, Publicidad, igualdad, eficiencia, entre otros.

Teniendo en cuenta el alto índice de demandas de carácter laboral existente en contra del municipio de Pereira a raíz de la vinculación de personal a través de contratos de prestación de servicios y de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 0001 del 14 de noviembre de 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZAN LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”, resulta imperante y necesario definir estrategias de defensa acordes al criterio jurídico ya sentado por la Jurisdicción Laboral (Juzgados Laborales del Circuito, Tribunal Superior Sala Laboral y Corte Suprema de Justicia) y por la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Tribunal Contencioso Administrativo y Consejo de Estado) sobre el tema del contrato realidad.

Para tal efecto, resulta necesario recordar el origen y los elementos que estructuran el contrato de trabajo bajo el principio constitucional y legal de la primacía de la realidad, como se observa en el siguiente cuadro:





En efecto, basta con que confluyan los tres elementos estructurales del contrato de trabajo (prestación personal del servicio, subordinación y remuneración) para determinar que, en realidad de verdad, el vínculo suscrito entre la administración y el contratista es de carácter laboral y no civil regido por la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007.

Sin embargo, el Honorable Consejo de Estado **Sección Segunda, Sentencia 68001233300020130060301 (20972014) del 31 de octubre de 2017** precisó que “... **es el elemento de subordinación o dependencia el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios**, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente”. Y en esa misma oportunidad expresó el Alto Tribunal que “por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, pues para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión.”.

Ahora y pese a este desolado panorama, a través de la defensa se puede desestructurar los argumentos y pretensiones de la demanda de este tipo por medio del material probatorio y los medios exceptivos. Si bien es cierto, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del ex contratista (declarado trabajador) ha sido un tema suficientemente decantado por la Jurisprudencia, tales medios de defensa pueden alivianar en gran medida las condenas e incluso extinguir derechos. Desde el punto de vista sustancial y en aras de velar por una defensa idónea, se resaltan los siguientes aspectos que deben ser observados y examinados en todos los casos que se tramiten.

ASIGNACION DE LA DEMANDA

Asignada la demanda al abogado de defensa judicial, deberá tramitar el poder ante la Secretaría Jurídica y documentarse no sólo de los antecedentes administrativos sino toda documentación que obre en la hoja de vida o carpeta de la parte actora a través de la secretaría a la que correspondía o estaba asignada, ello con el fin de obtener su expediente administrativo y así poder ejercer en debida forma la defensa.

Esta fase inicial comprende un análisis jurídico de los elementos que la conforman, que deben ser revisados por el apoderado de la Entidad Pública, para plantearse el problema jurídico y fortalecer la defensa judicial en ese sentido, siguiendo los parámetros que se enuncian a continuación:

1. Enumerar los hechos: Clasificarlos y tener claridad de los mismos.
2. Clasificar los hechos: Consiste en seleccionar los hechos relevantes para el caso, esto es, los de mayor relevancia jurídica, aquellos sin los cuales el problema jurídico no se presentaría.



3. Determinar los medios probatorios con los cuales se acredita la existencia de los hechos relevantes en el proceso.
- 4.. Definir el aspecto jurídico que se va a considerar de acuerdo a los hechos negados que se pueden probar.
5. Revisar una a una las pretensiones de la demanda y de esta misma manera pronunciarse sobre ellas argumentando jurídicamente la posición al respecto.
6. Realizar un análisis probatorio teniendo en cuenta lo dispuesto por la normatividad vigente, esto es, la Ley 712 de 2001, Ley 1149 de 2007 en materia laboral, Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012 y demás normas concordantes aplicables por analogía. La prueba debe servir para demostrar lo debatido en el proceso y cumplir con las formalidades legales exigidas, en cuanto a su oportunidad, procedencia y pertinencia, su práctica y el cumplimiento de las formalidades propias de cada una de ellas.
7. Acudir a la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre para respaldar nuestros argumentos de defensa

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Obtenida la documentación necesaria, el abogado quien tiene a cargo el caso concreto determinará si se agotó el requisito de procedibilidad para los casos que se tramitan ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si se trató de un solo contrato de prestación de servicios o si por el contrario se trató de varias vinculaciones, a su vez si éstas tuvieron solución de continuidad o si fue de manera ininterrumpida. También es importante identificar la fecha en que culminó la última vinculación, pues resulta de gran trascendencia para la defensa tener como referente si se encuentra frente a una prescripción extintiva o trienal para ser invocada como tal en la contestación de la demanda.

Deberá centrarse la defensa en desvirtuar la subordinación a través de los medios probatorios y exceptivos previos o de mérito a plantear, tendientes a enervar la acción, tales como:

EXCEPCIONES PREVIAS

Las excepciones previas se caracterizan porque su finalidad primordial es atacar el procedimiento, no la cuestión de fondo del litigio o del derecho controvertido. Se encuentran enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso:



Nral	Excepción Previa
1	Falta de jurisdicción o de competencia.
2	Compromiso o cláusula compromisoria.
3	Inexistencia del demandante o del demandado.
4	Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.
5	Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.
6	No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.
7	Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.
8	Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
9	No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
10	No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.
11	Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

Recordemos que las excepciones de mérito o de fondo son el medio de defensa con que cuenta el demandado para desvirtuar tanto la sinopsis fáctica como la argumentación jurídica y del cual se puede hacer uso en la contestación de la demanda. No todas estas se encuentran enlistadas o denominadas expresamente en la Ley, por lo que es el vocero judicial quien debe darle su denominación. Para una mayor comprensión, se trae a colación algunos de los medios exceptivos esgrimidos para debilitar la demanda:

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Es una condición necesaria para la procedencia de la acción, no es igual los presupuestos para el ejercicio de la acción, que las condiciones para la procedencia de ésta. Los primeros son los requisitos para ejercer la acción y necesarios para la admisión de la demanda y la validez del procedimiento, mientras que las segundas constituyen las condiciones necesarias para el acogimiento de la acción en la sentencia definitiva. Una de esas condiciones es la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial (activa o pasiva) que se refiere a la calidad de las partes e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo; tal carga procesal corresponde al actor acreditarla demostrando su calidad de titular del derecho y la calidad de obligada de la entidad demandada.



Esta excepción ha prosperado en un sinnúmero de procesos laborales en los que se vinculó al municipio de Pereira, en los que se pretendía que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre este y las personas que realmente prestaron sus servicios para otras entidades y sociedades de carácter privado, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y financiera, y con patrimonio propio.

Frente a este tema ya se ha sentado un criterio unificado en primera instancia tanto por los juzgados laborales del circuito de esta ciudad como en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, declarando probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y de contera absolviendo al ente territorial, siendo una de ellas la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral el 19 de mayo de 2016 y confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira mediante providencia del 31 de mayo de 2017, indicando que es innegable que de la malla forman parte las vías, los andenes, las zonas verdes y el amoblamiento urbano, pero para efectos de la solidaridad que se discute, la respuesta no se hilvana recorriendo aspectos tan sencillos como el planteado, pues no puede perderse de vista que todas las cuestiones que es del caso analizar en el presente asunto deben tener una fuente, una connotación y unos efectos jurídicos.

Conforme al artículo 230 de la Constitución Política el juez sólo debe apegarse a la ley y si el legislador no previó ese tipo de solidaridad en la responsabilidad de la empresa usuaria, no puede crearla el operador judicial o extender la dispuesta en el artículo 34 del CST para otras situaciones concretas al caso controvertido, dado que dicha norma establece es la solidaridad entre un contratista independiente y el dueño de la obra, pero jamás esa solidaridad ocurre frente a un ente territorial como socio de un tercero y mucho menos para la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva.

Y en pronunciamiento más reciente el mismo alto Tribunal en sentencia del 7 de junio de 2018 con ponencia del Honorable Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, proceso radicado bajo el No. 66001-31-05-003-2008-00089-06, actor Adolfo Rengifo Hurtado, expuso:

“Por otro lado, si el punto se pudiera dilucidar con prescindencia del tantas veces aludido contrato de obra pública, y solo se atendiera el hecho de que el Municipio de Pereira, es el dueño del sistema masivo de Transporte de pasajeros del área metropolitana, por la simple razón de que estaba proyectado a rodar, y en efecto hoy circula por su malla vial, entre otros, dando a entender, que las vías son de dominio de dicho Municipio, amén de que sobre las mismas fue que el actor ejecutó sus labores, es menester despachar negativamente dicha argumentación, por cuanto los Municipios, como los demás entes Públicos, ejercen un derecho de dominio semejante al que ejercen los particulares sobre sus bienes, únicamente en relación con los bienes fiscales (art. 674 C.C.)



De tal suerte que, las vías, carreteras, puentes, parques y caminos, son bienes de uso público (art. 674 C.C.), que se encuentran lejos de un dominio focalizado en un solo sujeto titular, así sea éste, un ente público encargado de su mantenimiento y conservación, como son las calles que componen la malla vial de cada Municipio, por lo que no se satisface el enunciado normativo de la calidad de dueño de la obra (art. 34 C.L.), y en consecuencia, se negará ese pedimento.”.

Igual ocurre en los contratos de apoyo en los que el ente territorial tiene como fin cumplir los programas de desarrollo.

PRESCRIPCIÓN

Vale la pena recalcar que no existe unificación al respecto en la Jurisdicción Ordinaria Laboral y la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en tanto la forma de contabilizar el término prescriptivo dista una de la otra comoquiera que para la primera basta con que el vínculo contractual se haya interrumpido por el lapso de 15 días para afirmar que no se trató de una sola vinculación y entra a analizar de manera independiente cada uno de los contratos y de paso afectándolos por el fenómeno jurídico de la prescripción contando tres años atrás a partir de la fecha de la reclamación administrativa efectuada frente a la administración. No ocurriendo lo mismo con la segunda jurisdicción, quien ha señalado que mientras no haya transcurrido tres años entre uno y otro contrato, así como para promover la acción, aquellos son imprescriptibles. En igual sentido se ha referido frente a los aportes a seguridad social por tratarse de derechos irrenunciables.

Al amparo de lo preceptuado por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo se señala:

“PRESCRIPCION. Las acciones que emanan de las leyes sociales PRESCRIBIRAN EN TRES AÑOS, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigibles. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual”.

En tratándose de la oportunidad con la que cuenta la parte actora para ejercer la acción el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que éste se contabiliza desde la fecha de terminación del último vínculo o se haga exigible la obligación, esto es, a través de reclamación, así:

PRESCRIPCION DE ACCIONES ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.



En igual sentido el Consejo de Estado se refirió en sentencia de unificación del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16 Actor: LUCINDA MARÍA CORDERO CAUSIL Demandado: MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO (CÓRDOBA), así:

“Si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador. Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.”

Esta posición ha sido asumida por el Distrito Judicial de Risaralda y en consecuencia es pilar esencial que en todas y cada una de las contestaciones se proponga este medio exceptivo, reiterando los argumentos del Alto Tribunal y en los eventos en que el juez o magistrado competente se aparte de dicho precedente, deberá invocarse como fundamento del recurso de apelación y como segunda opción en sede constitucional a través de la acción de tutela por incurrirse en una vía de hecho directa.

COBRO DE LO NO DEBIDO

Teniendo en cuenta que para los años 2010 y 2011 los contratistas fueron vinculados directamente por empresas de servicios temporales EST y/o cooperativas de trabajo asociado CTA mediante contratos de trabajo, quienes cancelaron todas y cada una de las acreencias laborales, no se comprende entonces por qué ahora nuevamente se incluyen en las pretensiones de la demanda tales rubros, lo que podría dar al traste con un enriquecimiento sin justa causa o cobro de lo no debido.

BUENA FE

Ahora, debe decirse que la imposición de tal sanción, no es automática a partir del día 91 de la culminación del contrato de trabajo conforme a lo esgrimido por el Decreto 797 de 1949, sino que exige del juzgador un análisis concienzudo de la buena o mala



fe de la administración (empleador) en el impago de las prestaciones y salarios debidos. Tales aspectos, se deben verificar tanto al momento del finiquito del contrato, como en su ejecución, con miras a determinar si el empleador, actuó válidamente bajo la convicción de no estar frente a un contrato de trabajo o tal omisión de pagar, se generó en una clara contravía de tal buena fe.

El parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, establece que:

“Los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores, en los casos en que existan tales relaciones jurídicas conforme al artículo 4º de este Decreto, solo se considerarán suspendidos hasta por el término de noventa (90) días, a partir de la fecha en que se haga efectivo el despido o el retiro del trabajador. Dentro de éste término los funcionarios o entidades respectivas deberán efectuar la liquidación y pago de los correspondientes salarios, prestaciones e indemnizaciones que se adeuden a dicho trabajador.

(...)

Si transcurrido el término de noventa (90) días señalado en el inciso primero de este parágrafo no se hubieren puesto a órdenes del trabajador oficial los salarios, prestaciones e indemnizaciones que se le adeuden, o no se hubiere efectuado el depósito ante autoridad competente, los contratos de trabajo recobrarán toda su

Lo anterior implica que, la entidad pública empleadora tiene un período “de gracia” de 90 días para efectuar la liquidación final de salarios y prestaciones al trabajador y proceder a su pago. En caso de incumplirse con tal mandato, a partir del día 91 se “recobrarán” los efectos de dicho contrato, lo que implica no un reintegro del trabajador, sino que se genere el deber del empleador de pagar un día de salario por cada día de tardanza.

INEXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL DE LEGALIDAD

Entendiéndose como Acto Administrativo, aquella manifestación unilateral de voluntad de la administración pública tendiente a producir efectos jurídicos; no puede compararse con un simple acto de trámite, bajo el entendido que para su redacción y expedición no se efectuó un análisis o consideración intelectual basada en argumentos legales y jurídicos para decidir una situación de fondo, esto es, cuando un acto administrativo no reúne las más elementales exigencias o requisitos (formalidad constitutiva ad substantiam actus y requisitos esenciales), el acto ni siquiera tiene la apariencia de tal y por lo mismo no existe y de contera no produce efectos jurídicos.

PROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA

Existiendo en la actuación administrativa varios pronunciamientos a través de diferentes actos administrativos sobre los mismos hechos, la demanda debe encaminarse a la declaratoria de nulidad de todos y cada uno de aquellos y que se originaron de la reclamación administrativa inicialmente radicada. Así como lo ha señalado el H. Consejo de Estado, Sección Segunda en sentencia del 18 de mayo de 2011, proferida dentro del expediente No. 2006-02409-01 (1282-10), en la cual funge como Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Amparo Vallejo



Jaramillo Demandado: CAJANAL EICE, en los siguientes términos:

“A partir de lo anterior, es claro que en todo caso debe demandarse el acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad de la Administración frente a una situación jurídica particular, junto con aquellas decisiones que en vía gubernativa constituyan una unidad jurídica con el mismo, pues ello compone necesariamente la órbita de decisión del Juez frente a una pretensión anulatoria, precisamente por la identidad y unidad de su contenido y de sus efectos jurídicos, sin que pueda segmentarse bajo tales condiciones el análisis de su legalidad”.

INAPLICABILIDAD DE LA CONVENCION COLECTIVA

Acogiendo el concepto jurídico emitido por el Ministerio de Trabajo, en razón a la consulta elevada sobre el tema concreto de la aplicación y/o extensión de la Convención Colectiva de Trabajadores Oficiales del municipio de Pereira a los trabajadores oficiales de la banda sinfónica de músicos de la misma administración municipal, dicha autoridad señaló:

“Alcance al radicado 08SE2018120300000031192”:

“Claro lo anterior, esta oficina considera que si bien dicha extensión únicamente aplica a trabajadores oficiales, por cuanto se reitera que el régimen de negociación colectiva para quienes se encuentran vinculados mediante una relación legal y reglamentaria, se rige por lo contemplado en el decreto 160 de 2014 compilado por el Decreto 1072 de 2015, será necesario tener en cuenta la totalidad de trabajadores de la entidad con fin de determinar si la organización sindical es de carácter mayoritario.....” Más adelante señala: *“Por lo anterior, para determinar si el sindicato es mayoritario y en consecuencia es extensiva la convención colectiva, el sindicato existente de trabajadores oficiales dedicados al mantenimiento y construcción de visa, edificios y otros; debe agrupar a más de la tercera parte del total de los trabajadores de la entidad. **Entiéndase la totalidad de trabajadores aquellos que hacen parte de la planta de trabajadores oficiales, planta de empleados públicos y plantas de administrativos de la secretaria de educación, así la convención no sea posible aplicarla para estos por mandato legal.**”* (Subrayas, negrilla, fuera de texto).

En aplicación de lo anterior para efectos de demostrar si la organización sindical es de carácter mayoritario, tenemos que en el municipio son **498** empleados públicos, **288** trabajadores oficiales y **288** planta de administrativos de la Secretaria de Educación SGP, para un total de **1.074** (totalidad trabajadores) X **33.33** (tercera parte de esta totalidad) = **358.00**; **faltando un numero de 70 afiliados para que la organización sindical “SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA” (358-288=70),** pudiera ser de carácter mayoritario.

Con la expedición de la Ley 1161 de 2007, se incluyó una nueva categoría de trabajadores oficiales y estos son los músicos de las orquestas sinfónicas artículo 1°



de la Ley 1161 de 2007, que prescribe que los músicos de las orquestas de carácter sinfónico al servicio del Estado tendrán el carácter de trabajadores oficiales y se vincularán mediante contrato de trabajo, los cuales tienen, por consiguiente, derecho a presentar pliegos de peticiones y firmar convenciones colectivas, que regule sus relaciones laborales. Ley, que no consideró las diferencias existentes en actividades y requisitos, entre otros, respecto a los trabajadores oficiales de mantenimiento y obras públicas.

A partir de la anterior premisa, el municipio de Pereira no procede de manera arbitraria, ni desconoce los derechos de los músicos, sino que, por el contrario, en desarrollo de las normas, busca hacer efectivas sus previsiones y permitir el ejercicio del derecho de negociación colectiva; toda vez, que a la fecha no existe pronunciamiento jurisprudencial, ni fallo alguno de Juez, sobre aplicación de una convención colectiva de trabajadores de mantenimiento y obras públicas es decir **obreros**, a los trabajadores oficiales **músicos** de las bandas sinfónicas al servicio del Estado.

INEXISTENCIA DE IGUAL ENTRE LOS TRABAJADORES OFICIALES OBREROS Y TRABAJADORES OFICIALES MUSICOS DE LA BANDA SINFÓNICA

Como se observa paladinamente existe una diferencia abismal entre las actividades, jornada laboral, condiciones de labores y otras funciones inherentes a un trabajador oficial **-músico-** de la Banda Sinfónica y los trabajadores oficiales **-Obreros-** del municipio de Pereira, de una parte, los trabajadores oficiales-obreros además de regirse por el contrato de trabajo, cuentan con una convención colectiva dentro de la cual se encuentra el Acta de fecha octubre 16 del año 2007, suscrita entre el Municipio de Pereira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales-OBTEROS, donde acordaron LOS OFICIOS Y FUNCIONES para los mismos; y los Trabajadores Oficiales-Músicos, se rigen por el contrato de trabajo y por el decreto 376 que contiene el MANUAL DE ACTIVIDADES, REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y COMPETENCIAS de los trabajadores oficiales-MÚSICOS de la banda sinfónica del municipio de Pereira” ; no encontrándose igualdad alguna entre OBTEROS y MUSICOS.

Para una mayor comprensión sobre el tema, me permito traer a colación un aparte de la Sentencia No. T-432/92 de la Corte Constitucional que trata el tema y estipula:

“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente formación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.”

GENÉRICA

Como es bien sabido por la comunidad jurídica es cualquier excepción que se encuentre probada en el proceso y de la cual deba pronunciarse oficiosamente el juez o magistrado en la sentencia.



LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

El llamamiento en garantía es una figura jurídica a través de la cual se puede hacer uso en un proceso judicial hacer parte de él a otro sujeto pasivo, el cual por sus características puede tener la obligación de cumplir en caso de una condena y de esta manera alivianar la carga del demandado principal.

El Código General del Proceso en su artículo 64 establece:

“Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.”.

A su vez el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula la figura del llamamiento en garantía en los siguientes términos:

“Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.”.

NULIDADES PROCESALES

No puede dejarse de lado la invocación de las nulidades procesales como herramienta jurídica ante la ineficacia de las etapas del proceso por el incumplimiento de algunos de los requisitos que la ley prescribe para su validez, esto hace pensar que se reduce de esta manera irregularidades nacientes de situaciones procesales no previstas por el legislador pero que en la práctica podrían causar una afectación grave a la garantía del debido proceso de cualquiera de las partes, mismas que se encuentran establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso, que a la letra reza:

Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. *Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.*



2. *Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.*
3. *Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.*
4. *Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.*
5. *Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.*
6. *Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.*
7. *Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.*
8. *Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.*

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Cortes Constitucional mediante Sentencia [C-537](#) de 2016.



Artículo 134. Oportunidad y trámite. *Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.*

FICHA COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Admitida la contestación presentada, deberá el apoderado diligenciar la ficha técnica de conciliación fundamentada en los argumentos expuestos en ella, la cual será sustentada ante el Comité Técnico de Defensa de la entidad, quienes previo a su reunión deben contar con la información allí contenida a través de la página del SIPROJ para su análisis y posterior aprobación, desaprobación o corrección, según sea el caso.

La ficha técnica además deberá contener jurisprudencia actualizada y doctrina que respalde su recomendación o propuesta.

AUDIENCIAS EN LA JURISDICCIÓN LABORAL Y DESARROLLO DE LAS MISMAS

La Ley 1149 de 2007 reformó el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos, los cuales se desarrollaran en dos audiencias, de acuerdo a lo definido en el artículo 4º ibídem, que modifica el artículo 44 de la codificación procesal laboral, así:

“Artículo 44. Clases de audiencias. *Las audiencias serán dos: una de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio; y otra de trámite y de juzgamiento.”.*

Tales audiencias no podrán suspenderse y las mismas se desarrollarán sin solución de continuidad dentro del horario hábil establecido por los Consejos Seccionales de la Judicatura hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso habilite más tiempo. En ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias. Es decir, que, si es necesaria la suspensión de una de ellas, siempre se continuará con la inicialmente celebrada, no habrá cierre de la audiencia hasta que terminé el juzgamiento.

Para dilucidar el orden y desarrollo de las audiencias, me permito resumirlo en el siguiente mapa conceptual:

ART. 77 CPL Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Todas las decisiones adoptadas durante su trámite se notifican en estrados, en consecuencia, los recursos que se presenten frente a ellas, serán sustentados de ipso facto.

1. Verifica asistencia (importante a efectos de imposición de sanciones pecuniarias y procesales) La inasistencia de una o todas las partes no impedirá la realización de la audiencia, excepto si antes de la hora señalada se ha



presentado solicitud de aplazamiento por causa justificada que se acredite con prueba sumaria.

2. Etapa de conciliación (Se convoca a las partes para proponer fórmulas de conciliación, si no existe ánimo conciliatorio, se declara fallida y se continúa con el trámite normal de la audiencia)
3. Decisión de excepciones previas (Se resuelve de fondo las que fueron propuestas, si se declara probada la que tenga el carácter de extintiva de las pretensiones o derechos reclamados, se ordena la terminación del proceso, de lo contrario se ordena subsanar la falencia invocada)
4. Saneamiento (Se convoca a las partes para que expongan si observan alguna irregularidad o vicio que pueda nulificar lo actuado hasta esa fase procesal)
5. Fijación del litigio (Nuevamente y de acuerdo a los hechos admitidos o no, se convoca a las partes para que manifiesten sobre cuáles versará el problema jurídico, así como las pruebas a decretar)
6. Decreto de pruebas (De acuerdo a la oportunidad, procedencia y pertinencia el juez decretará las pruebas solicitadas por las partes)
7. Fijación de audiencia de Trámite y Juzgamiento (El juez en estrados señalará la fecha y hora en que se llevará a cabo dicha audiencia en la cual se recepcionarán las pruebas decretadas, se correrá traslado para alegatos y se proferirá sentencia)

Artículo 80. Audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia. En el día y hora señalados el juez practicará las pruebas.

1. Dirigirá las interpelaciones o interrogaciones de las partes
2. Se correrá traslado de las pruebas documentales allegadas por fuera de la audiencia para que las partes se pronuncien al respecto, así como de los dictámenes periciales
3. Los testigos serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los demás
4. Se utilizará medios audiovisuales o video conferencia para testigos o interrogatorios fuera de la sede del Despacho
5. Escuchará los alegatos de conclusión de las partes (No se puede exceder de 20 minutos por cada parte conforme al proceso verbal sumario)
6. En el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o podrá decretar un receso de una (1) hora para proferirla y se notificará en estrados
7. Así mismo y en el acto se podrá solicitar corrección, adición o aclaración de la sentencia, se interpondrán los recursos de ley, los cuales serán sustentados de igual manera
8. Interpuestos y sustentados los recursos, el juez dispondrá sobre su admisión y ordenará la remisión del proceso ante el superior en el efecto suspensivo
9. Ante la ausencia de recursos, el juez dispondrá la remisión del proceso ante el superior para que se surta el grado jurisdiccional de consulta si hay lugar a este conforme a lo dispuesto en el artículo 69 CPL

De todo lo desarrollado durante las audiencias se levantará copia del acta respectiva y a solicitud de parte se expedirá en medio magnético.



Artículo 82. Audiencia de trámite y fallo en segunda instancia. Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83.

1. En esta audiencia se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.
2. Cuando se trate de apelación de un auto o no haya pruebas que practicar, en la audiencia se oirán los alegatos de las partes y se resolverá el recurso.

AUDIENCIAS EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO DE LAS MISMAS

La oralidad en la Jurisdicción Contencioso Administrativa se implementó con la Ley 1437 de 2011, que, a diferencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en algunas de sus etapas procesales se permite la escrituralidad, lo que se puede interpretar como un sistema procesal mixto. De igual manera, toda decisión proferida en audiencia será notificada en estrados, en tal virtud los recursos de ley deberán interponerse y sustentarse en esa oportunidad.

Su desarrollo mediante las audiencias se encuentra establecido en los artículos 180 y ss del CPACA, así:

Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

1. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del juez o magistrado
2. Verificación de asistencia. Todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente so pena de ser sancionado pecuniariamente. También podrán asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público. La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia, excepto si se efectuó solicitud de aplazamiento previamente por causa justificada y que medie prueba sumaria.
3. Seguidamente el juez o Magistrado deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.
4. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas. Si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
5. Resueltas las excepciones, el juez indagará a las partes sobre los hechos en los que están de acuerdo, y los demás extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la de reconvención, si a ello hubiere lugar, y con fundamento en la respuesta procederá a la fijación de litigio.
6. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento.



7. En esta misma audiencia el juez o magistrado se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que ésta no hubiere sido decidida.
8. Se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuáles exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión, o las de oficio que el juez o magistrado ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.
9. Antes de finalizar la audiencia el juez o magistrado, fijará fecha y hora para la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CPACA.

Artículo 181. Audiencia de pruebas.

1. En la fecha y hora señaladas para el efecto, y con la dirección del juez o magistrado ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de ésta pueda exceder de quince (15) días.
2. Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrá suspender en los siguientes casos:
 - a. En el evento de que sea necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha, por el término fijado por la ley.
 - b. A criterio del juez y cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario. En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento

Artículo 182. Audiencia de alegaciones y juzgamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o subsección correspondiente y en ella se observarán las siguientes reglas:

1. En la fecha y hora señalados se oirán los alegatos de las partes, intervención que no podrá extenderse por más de veinte minutos por cada uno. También se oirá al Ministerio Público.
2. El juez o magistrado informará el sentido de la sentencia en forma oral, si ello es posible. De no ser así, la sentencia se proferirá dentro de los treinta días siguientes.

Siempre se levantará acta de lo discurrido en la audiencia, quedando a disposición de las partes el contenido de la misma en medio magnético.

RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL

Contra las providencias judiciales procederán los siguientes recursos, conforme al artículo 62 del CPL modificado por el artículo 28 de la Ley 712 de 2001:



1. El de reposición.
2. El de apelación.
3. El de súplica.
4. El de casación.
5. El de queja.
6. El de revisión.
7. El de anulación.

ARTICULO 63. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICION. El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados, y se decidirá a más tardar tres días después. Si se interpusiere en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora.

ARTICULO 64. NO RECURRIBILIDAD DE LOS AUTOS DE SUSTANCIACION. Contra los autos de sustanciación no se admitirá recurso alguno, pero el Juez podrá modificarlos o revocarlos de oficio, en cualquier estado del proceso.

ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. Modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.
2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.
3. El que decida sobre excepciones previas.
4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.
5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.
6. El que decida sobre nulidades procesales.
7. El que decida sobre medidas cautelares.
8. El que decida sobre el mandamiento de pago.
9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.
10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.
12. Los demás que señale la ley.

El recurso de apelación se interpondrá:

1. Oralmente, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí mismo se concederá si es procedente.
2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez resolverá dentro de los dos (2) días siguientes.



ARTICULO 66. APELACION DE LAS SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA. Modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007. Serán apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, en el acto de la notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesaria; interpuesto el recurso el juez lo concederá o denegará inmediatamente.

ARTÍCULO 66-A. PRINCIPIO DE CONSONANCIA. Modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001. La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación.

ARTICULO 68. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. Procederá el recurso de queja para ante el inmediato superior contra la providencia del Juez que deniegue el de apelación o contra la del Tribunal que no concede el de casación.

ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. Modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de "consulta".

Es procedente cuando en las sentencias de primera instancia, se profiera decisión totalmente adversa a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.

También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior.

ARTÍCULO 86. RECURSO DE CASACIÓN FRENTE A LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. Modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

ARTICULO 89. INTERPOSICION DEL RECURSO "PER SALTUM". El recurso de casación per saltum contra las sentencias de los Jueces del Círculo judicial del Trabajo de que trata la letra b) del artículo 86, se propondrá y se concederá o denegará dentro de los términos y en la misma forma que el de apelación.

La parte que desee saltar la instancia de apelación deberá obtener el consentimiento escrito de la contraparte o de su apoderado, que deberá presentarse personalmente por su signatario ante el mismo Juez. La impugnación en casación por salto sólo podrá fundarse en la causal primera del artículo 87.



RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Los recursos ordinarios y de trámite ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentran enlistados en los artículos 242 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.
5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.
6. El que decreta las nulidades procesales.
7. El que niega la intervención de terceros.
8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.
9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.



ARTÍCULO 244. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTOS. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente en el transcurso de la misma. De inmediato el juez dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si lo concede o lo niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta.
2. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió. De la sustentación se dará traslado por Secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas partes apelaron los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.
3. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.
4. Contra el auto que decide la apelación no procede ningún recurso.

ARTÍCULO 245. **QUEJA.** Este recurso procederá ante el superior cuando se niegue la apelación o se conceda en un efecto diferente, para que lo conceda si fuera procedente o corrija tal equivocación, según el caso. Igualmente, cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este Código. Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 246. **SÚPLICA.** El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.

Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:



1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.
3. Recibido el expediente por el superior, si este encuentra reunidos los requisitos decidirá sobre su admisión.
4. <Numeral modificado por el artículo [623](#) de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.
5. En la audiencia de alegaciones y juzgamiento se aplicarán las mismas reglas establecidas para esa audiencia en primera instancia.
6. En la sentencia se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obediencia y cumplimiento.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.

ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.



RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA.

ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales.

ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos. Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:

1. Noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad.
2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad.
3. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.
4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes.
5. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.

El recurso de unificación de jurisprudencia no procederá para los asuntos previstos en los artículos [86](#), [87](#) y [88](#) de la Constitución Política.